



Por el fin del genocidio de la juventud negra y pobre en Brasil

Valdênia Aparecida Paulino Lanfranchi*

En cualquier país que vive en un régimen democrático, el derecho de libre movimiento es sagrado. Andar por las calles, estar en las plazas públicas, jugar en espacios abiertos son actividades que vemos todo el tiempo, pero no es lo que sucede en Brasil.

“Él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, decía el policía a la madre de Alex que lloraba desconsolada sobre el cuerpo del hijo que acababa de ser víctima de homicidio por policías militares. Esa expresión tan utilizada por los policías y a menudo reproducida por la gente, busca justificar lo injustificable, es decir, el genocidio de la juventud negra. ¿Desde cuándo la vida tiene horario y lugar para ser protegida? Todos los días 63 jóvenes negros son ejecutados en este país. A menudo por agentes del Estado, pero también por otros jóvenes atrapados en la criminalidad, materializando la desigualdad socio económica del país y el desinterés por parte de las autoridades con la juventud negra y pobre.

No podemos escondernos más detrás de frases hechas, construidas para naturalizar y justificar la violencia cometida contra la juventud negra y pobre de Brasil. En 2013, de los 50.715 homicidios, el Ministerio de Salud (MS/Datasus) apunta que el 72% corresponde a población negra, contra el 26% de la población blanca y amarilla; y el estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) constató que la probabilidad de que un adolescente negro sea asesinado es 3,7 mayor que la de un adolescente blanco. En el Mapa de la Violencia realizado por la UNESCO se constata que entre los años 2002 y 2012 la victimización de la población negra subió del 73% al 146,5 % en relación a homicidios de personas blancas. El informe de la ONU de 2014 apunta a Brasil como el responsable del 10% de los homicidios del mundo. En ese mismo año, el número total de homicidios (registrados) llegó a 58.599.

La violencia contra la juventud, en especial la juventud negra, empeoró de tal manera que en el año 2015, por la presión de la sociedad civil, se creó una Comisión Parlamentaria de Investigación – CPI para examinar la existencia de un genocidio de la juventud negra en Brasil.

* Valdênia Paulino es abogada y activista contra las injusticias sociales y contra la violencia en los barrios más marginales de Brasil. Su compromiso con los derechos humanos la llevó a investigar y documentar las denuncias contra la policía sobre torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, extorsiones y corrupción. A lo largo de su trayectoria, Valdênia ha participado en la creación de varias organizaciones, entre ellas el Centro de Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de Sapopemba (Sao Paulo).



¿Genocidio? si, ¡genocidio! Brasil ratificó la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio en 1952, por medio del Decreto nº. 30.822. Para dicha Convención, el genocidio se define como “crimen contra la humanidad que consiste en matar miembros de un grupo nacional, étnico, religioso o perteneciente a una determinada raza, con el fin de propiciar la destrucción total o parcial de ese grupo”. Tomando como base estos documentos se pidió la apertura de la referida CPI.

Después de cuatro meses de trabajo, la CPI publicó, en julio de 2015, su informe final. En este constata que entre los años 2008 y 2011, fueron registrados 206 mil homicidios en el país. Sólo en 2011 fueron 53 mil, de los que el 53,3% eran jóvenes y de este subgrupo el 71,44% eran negros.

El informe de la CPI apunta que los jóvenes negros asesinados son en su mayoría de sexo masculino, con niveles bajos de estudios y que viven en las periferias donde los servicios públicos son escasos o no llegan. Otro punto abordado fue el tratamiento desigual de la policía con respecto a la población negra y blanca.

La conclusión de la CPI fue que existe genocidio contra jóvenes negros en Brasil.

Planteado en 2007 por el Foro Nacional de la juventud Negra – FONAJUNE, el tema del genocidio marcó, tímidamente en 2010, la agenda del Poder Ejecutivo Nacional, pero no alcanzó las agendas de los entes federativos. En 2015, el tema entra en la agenda del Poder Legislativo Nacional con la instauración de la Comisión Parlamentaria de Investigación, conforme a lo mencionado más arriba, reconociendo la existencia del genocidio. Aunque, después del lanzamiento del Informe de la CPI, el problema no gana prioridad en las agendas de las autoridades. Al contrario, con el agravamiento de la crisis política, el debate público disminuyó, en tanto que la violencia sólo ha aumentado.

Sin dejar de reconocer los problemas del gobierno federal en la gestión de Dilma, que, desde el punto de vista de los movimientos sociales que actúan por el reconocimiento de los derechos de la población que vive en situación de pobreza, no justifican el proceso de destitución; tenemos que afirmar que su gestión y la del presidente Lula fueron las que más trabajaron en favor de las comunidades que viven en situación de pobreza. Desgraciadamente, sin reformas estructurales, el Partido de los Trabajadores cayó en la trampa de trabajar con las mismas reglas usadas siempre por los gobiernos anteriores. La diferencia es que los gobiernos anteriores tenían influencia en todas las demás instituciones públicas del Estado (poder legislativo y sistema de justicia). Esta es la razón por la que las mismas reglas, cuando han sido usadas por la presidenta Dilma, han provocado su destitución. ¿Qué es lo que ha hecho? Traslado fondos, sin infringir los límites del presupuesto, para atender



proyectos sociales que beneficiaban a las comunidades que viven en situación de pobreza.

Después de la destitución de la presidente Dilma, el Gobierno de Temer inició una serie de medidas que han preocupado mucho a los defensores/as de derechos humanos. Entre las medidas están el nombramiento de Alexandre de Moraes como Ministro de Justicia, quien declaró en la víspera del inicio del Foro Nacional de Seguridad Pública (foro que reúne a los especialistas de la sociedad civil, académicos y policías para planificar la política de seguridad), realizado entre los días 21 y 24 de este mes, que “Brasil no necesita de investigación o estudios, sino de armas y munición para tratar la seguridad pública”. Los recortes en el gasto público anunciados por el actual gobierno afectan, fundamentalmente a las políticas sociales (vivienda, inclusión social de jóvenes, etc.). La semana pasada, el gobierno federal anunció la retirada de materias como la educación física, artística y la sociología del currículo escolar de la enseñanza secundaria – período escolar que atiende a adolescentes y jóvenes. La medida reduce la formación académica necesaria para la contratación de profesores para la escuela pública.

La lista de retrocesos anunciada es grande, pero lo que más nos preocupa es la intención de rebajar la mayoría de edad penal. Hoy Brasil es el cuarto país en población encarcelada y en condiciones reconocidas como precarias e inhumanas. Apoyar la rebaja de la mayoría de edad penal de los 18 años (como es actualmente) a los 16 años es con certeza promover una política de criminalización y exterminio de la juventud negra y pobre de Brasil.

Además de tomar conciencia urgentemente de los problemas que inciden en la violencia, es necesario decir basta al genocidio contra la juventud negra y pobre en Brasil. La propia CPI resalta la necesidad de un plan para hacer frente a los homicidios de jóvenes y sugiere un fondo nacional para la eliminación del racismo, que tiene en los homicidios de jóvenes negros su expresión más perversa y cruel. El punto clave es que la CPI reunió apenas a un pequeño grupo de parlamentarios y, todo el trabajo realizado, de no haber presión internacional, acabará como un informe más en los archivos del Congreso brasileño.

Ninguna comunidad en situación de pobreza escapa de las estadísticas aquí presentadas. En todas ellas hay madres llorando la pérdida de sus hijos. Como ellas dicen: “el genocidio ha mutilado nuestros cuerpos” al referirse a las madres que desarrollaron cáncer después de perder a sus hijos por causa de la violencia. Todas las comunidades pierden mucho, pues las mujeres que siempre ocuparon la primer línea en las luchas sociales, dan un paso atrás cuando pierden la alegría de vivir al enterrar a sus hijos, víctimas del genocidio.

Es necesario romper con el ciclo de violencia que arranca 63 jóvenes negros todos los días de la vida para la muerte. El saldo de más de 23 mil jóvenes



asesinados todos los años no es sólo un problema de Brasil, sino de toda la comunidad internacional, al final, el genocidio es un crimen de lesa humanidad.

¡Socorro! Ayúdenos a denunciar el genocidio de la juventud NEGRA y POBRE DE BRASIL.

Por otro lado, los jóvenes están ocupando las escuelas para pedir calidad en la enseñanza; usando grafitis, hip hop, poesías o teatro para denunciar y resistir la violencia; formando “colectivos juveniles” para organizarse y exigir políticas públicas. Además, seguimos también denunciando y siguiendo varios casos en el sistema de justicia para reducir la connivencia y lentitud del sistema.

¡Todo por el fin del genocidio de la juventud negra y pobre en Brasil!

Valdênia Aparecida Paulino Lanfranchi
São Paulo/ Brasil

Septiembre 2016.